

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por NELSON DE JESÚS ORTEGA ARBOLEDA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (Radicado **05001-31-05-011-2018-00361-00**).

### ANTECEDENTES

El demandante pretende que le sea reconocida una pensión de vejez de parte de Colpensiones o de Porvenir S.A a partir del 08 de septiembre de 2017, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como fundamento a sus pedimentos expuso: nació el 08 de septiembre de 1955, contando para la fecha de presentación de la demanda con 62 años. Para el 01 de abril de 1994 contaba con 38 años de edad, pero tenía alcanzadas 982 semanas de cotización, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 03 de septiembre de 2004 se firmó un formulario de afiliación en Porvenir S.A a su nombre y cuando se enteró de tal

acto, elevó petición a la administradora para solicitar la anulación de esa afiliación por darse de manera fraudulenta en la medida que los datos relativos a su identificación, su firma, su dirección y teléfono no correspondían a los suyos. Mediante comunicación del 28 de septiembre de 2009 Porvenir S.A dispuso la invalidez de esa afiliación informando que se procedería a trasladar los aportes al ISS, de cuya devolución no se opuso esta administradora. El 11 de septiembre de 2017 solicitó la pensión de vejez, negada por Resolución SUB 244488 del 31 de octubre de 2017 y confirmada por las SUB292162 del 18 de diciembre de 2017 y DIR 419 del 10 de enero de 2018, argumentándose que según base de datos se presentó un traslado a Porvenir S.A y la invalidez surtida por ilícito solo es acatable por orden de fiscalía o juez.

Surtido el traslado de rigor, Colpensiones dio respuesta al llbello de manera oportuna admitiendo la mayoría de los hechos expuestos y afirmando no constarle sobre la invalidez del acto de afiliación. Como medios de defensa propuso las excepciones de fondo de Inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez en los términos solicitados por el demandante, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Porvenir S.A. por su parte aceptó en suma los fundamentos fácticos señalados, aseverando no ser de su conocimiento los relativos a los ocurridos frente a entidades ajenas y niega que exista vinculación con el demandante como afiliado, en tanto la misma fue anulada con el reporte correspondiente al SIAFP. Formuló como excepciones de mérito las que denominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción.

En sentencia del 22 de junio de 2021, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A de todas las pretensiones de la demanda. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez a partir del 08 de septiembre de 2017 en cuantía equivalente a un SMLMV sobre 13 mesadas anuales. CONDENÓ a Colpensiones a pagar la suma de \$41.276.109,46 por concepto del retroactivo calculado hasta el 30

de junio de 2021, autorizando descontar de esta suma el valor de los aportes en salud. A partir del 1° de julio de 2021 Colpensiones deberá continuar pagando una mesada equivalente a \$908.526 sin perjuicio de los incrementos de ley. CONDENÓ a Colpensiones a cancelar los intereses moratorios a partir del 12 de septiembre de 2018 y hasta la fecha del pago. CONDENÓ en costas a Colpensiones, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.362.789.

Colpensiones inconforme de manera parcial con la decisión, interpuso recurso de apelación en lo que respecta a los intereses moratorios y las costas procesales impuestas, en tanto considera que la entidad no fundó su negativa en un actuar negligente, sino que se requería de un procedimiento especial para dar validez a las actuaciones que se adujo no fueron realizadas por el demandante, sin que para el momento de la negativa se haya incurrido en un error, ya que no le era dable estudiar al pretensión dada la filosofía de sus funciones, por lo que solicitó que en estos aspectos se revoque la sentencia proferida.

En los puntos no recurridos por la entidad pública condenada, habrá de revisarse la sentencia en el grado de Consulta acorde a lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

El problema jurídico consiste en determinar si se ajusta a derecho o no la decisión de primer grado en cuanto impuso a cargo de Colpensiones la

prestación económica de pensión de vejez, debiendo determinarse si se equivocó el Juez al concluir sobre la invalidez de la afiliación desplegada por el demandante ante Porvenir S.A. También se abarcará el aspecto de la imposición de intereses moratorios y costas a cargo de Colpensiones.

Existe plena prueba en el expediente que el demandante se encontraba afiliado al RPMPD y con fecha del 21 de septiembre de 2004 se diligenció un formulario de vinculación ante Porvenir S.A. (fl.23 y 157), administradora a la que se solicitó el 21 de agosto de 2009 la anulación de esa solicitud (fl.24), cuya respuesta emitida el 28 de septiembre de ese año avaló lo pedido (fl.26 y 160) y se dispuso la devolución de los aportes al extinto ISS como administradora del RPMPD (fls. 27-28 y 161), plasmadas en el historial laboral expedido por Colpensiones (fls. 17-22) con la observación de “*valor devuelto del Régimen de Ahorro Individual por pago al fondo*”.

A partir de ello y para resolver, debe decirse que como bien lo pregonaba el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, los afiliados cuentan con la garantía de la selección libre y voluntaria del régimen pensional consagrada como principio del Sistema General de Pensiones, cuya vulneración afecta o atenta contra esa libertad de selección, según lo dispone el artículo 271 de la Ley 100 de 1993.

En este asunto, el afiliado alega que no fue su voluntad trasladarse de régimen, por lo que al corresponder este a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente, y en consecuencia, esa afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, correspondía a la administradora que intervino en ese acto de vinculación, demostrar que esa vinculación se dio bajo las prerrogativas legales y que en efecto, si fue su intención pertenecer a este régimen.

Al respecto, debe señalarse que desde una primera oportunidad en la que el actor solicitó la anulación por no corresponder los datos personales plasmados en el formulario con el que se gestionaría su traslado a los suyos (fl. 24),

Porvenir S.A. luego del trámite administrativo que consideró pertinente, dio razón al solicitante anulando el trámite (fls. 26 y 160), gestionando la devolución de los aportes a la administradora del RPMPD por entender que nunca perteneció a su Fondo como integrante del RAIS, cuyo reporte fue efectuado al SIAFP (fl.158), y consignado en su historial laboral, generándose en el afiliado la convicción bajo el principio de la confianza legítima, de continuar perteneciendo al RPMPD, ya que a partir de enero de 2010 y hasta diciembre de 2015 continuó en virtud a la comunicación de anulación reportando cotizaciones con destino a Colpensiones sin problemática presente, generándose una expectativa legítima frente a la estabilidad de su situación jurídica concreta y expectativa favorable para acceder a su derecho pensional, por lo que este Fondo de Pensiones debió tener sumo respeto por el debido procedimiento administrativo, habida cuenta que ello puede repercutir en el acceso a derechos pensionales (Ver SL5170-2019), no siendo aceptable que a la información plasmada en el historial de cotizaciones del afiliado, que tuvo que ser verificada previo a su publicación, para garantizar su veracidad, exactitud, precisión y confiabilidad (Ver artículo 53 de la Ley 100 de 1993), se le reste validez de forma súbita y se traslade al interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas obligaciones en oportunidad (Ver sentencias T-079 de 2016, T-463 de 2016 T-436 de 2017, SL5172-2020, SL4167-2021, SL1116-2022).

Así, a más de ser aceptado por la misma administradora que llevó a cabo el trámite de afiliación, que tal acto no se sujetó a los parámetros legales que derivaran en su validez, lo que evitó el trámite judicial para determinar un ilícito en la actuación, no existe probanza arrimada a este trámite judicial de que el actor promoviera gestiones con el ánimo de trasladarse de régimen y que fuera su intención vincularse con Porvenir S.A para que fuera este Fondo el que administrara sus aportes, ni que Colpensiones haya adelantado las investigaciones necesarias para verificar o desestimar la exactitud del informe laboral del actor, por lo que atendiendo el respeto a la elección de régimen del promotor de esta acción, sin que existan razones atendibles ni sustento probatorio para dar por bien materializada la afiliación efectuada para el 21 de septiembre de 2004 y contrariar la definición del mismo Fondo respecto de su

propio acto, con aceptación tácita de Colpensiones al validar y publicar los aportes devueltos del RAIS y los posteriores en el historial de cotizaciones del demandante pese a contar con las herramientas de validación y fiscalización, es que resulta acertada la decisión del *A quo* cuando concretó como responsable de las contingencias aseguradas y prestaciones económicas del Sistema a las que llegara acceder el señor Nelson de Jesús Ortega a Colpensiones, donde venía afiliado desde el 22 de octubre de 1973 (fl.50).

A razón de lo dicho, es Colpensiones quien debe asumir la prestación por vejez si a ella hubiera lugar, por entenderse que Nelson de Jesús Ortega Arboleda nunca ha pertenecido al Régimen de Ahorro Individual administrado por Porvenir S.A.

Dada la revisión en el grado de consulta en favor de Colpensiones de la providencia, esta Sala de Decisión Laboral analizará si el demandante tiene derecho o no a esta prestación, examinando el quantum de la condena impuesta en primera instancia.

Lo primero por decir es que aun cuando la activa pregonó la satisfacción de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Juez de Instancia definió el derecho con base a los postulados generales de la Ley 100 de 1993, ya que conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 la prerrogativa transicional expiró el 31 de julio de 2010, pero se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha última en la que el actor no había alcanzado el límite de edad.

Bajo ese escenario, se tiene que acorde a lo regulado en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 las exigencias para acceder a esta prestación son: haber cumplido 62 años para el caso de los hombres, y haber cotizado 1.300 semanas, primero de los enunciados que se alcanzó para el 08 de septiembre de 2017, y segundo que superó con creces al lograr un total acumulado de 2028 semanas a diciembre de 2015 (fls. 17-22), reuniendo así los requisitos para acceder a la pensión de vejez a partir del 08 de septiembre de 2017 cuando alcanzó el requisito de edad, pues las 1300 semanas requeridas las logró desde momento previo, y siendo que la sentencia se basó en una

mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente sin oposición al respecto por la parte interesada, es en esta cuantía que debe ser reconocida la prestación y liquidarse el retroactivo pensional.

Efectuados los cálculos, se verifica que el valor de las mesadas mínimas a pagar desde el 08 de septiembre de 2017 y hasta junio de 2021 asciende a \$41.303.159, que resulta superior al condenado, pero que no habrá de modificarse por no haber sido este punto objeto de oposición, retroactivo que a partir del monto impuesto -\$41.276.109,46- y extendido hasta el 30 de junio de 2022 en cumplimiento del inciso segundo del artículo 283 del CGP, se eleva a \$53.635.791 como se detalla a continuación, valor del que deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud como bien lo adujo la *A quo*, correspondiendo una mesada pensional para 2022 de \$1.000.000.

AÑO	VR. MESADA	N° MESADA	TOTAL	
2021	\$ 908.526	7	\$ 6.359.682	\$ 41.276.109
2022	\$ 1.000.000	6	\$ 6.000.000	
		TOTAL	\$ 12.359.682	

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuyo gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la administradora en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que Colpensiones si tiene a su cargo los intereses moratorios pretendidos, por cuanto desde que el afiliado se percató del traslado sin su consentimiento, Porvenir S.A. bajo conductas de

aceptación dio paso a toda la gestión pertinente para retrotraer esa afiliación que igualmente consideró alejada de la legalidad, con el retorno de los aportes al ISS equivalente a 42 meses y el correspondiente reporte al SIAFP, cuyo asentamiento aparece reportado en el historial laboral, lo que da cuenta del recibo de los mismos a satisfacción, no encontrando razón para que ante la anulación proveniente del mismo Fondo que aceptó que dicho traslado no existió, Colpensiones se negara a asumir su calidad de administradora frente al afiliado demandante, anulación que se presentó desde momento anterior a la solicitud de la pensión de vejez elevada el 11 de septiembre de 2017, habiendo recibido bajo condiciones de normalidad y con ausencia de oposición o requerimiento alguno los aportes dados a partir de enero de 2010, no resultando admisible que solo al momento de hacer efectiva una de las prestaciones económicas a su cargo se resistiera a la vinculación a este régimen retardando el disfrute de la pensión ya causada, por lo que las razones de la negativa si se entienden dadas bajo un actuar negligente de la entidad, rubro que bajo estas premisas debe reconocerse a partir del 12 de enero de 2018 - así quedó plasmado en la parte motiva, con error evidenciado al reproducirse el numeral sexto de la decisión- y coincide con el término de cuatro meses que han de contabilizarse a partir de la data de la reclamación para el caso de las pensiones por vejez (artículo 9°, Parágrafo 1° Ley 797 de 2003).

Sobre las costas procesales, a igual conclusión se arriba, encontrando que se trata de una condena objetiva a cargo de quien fue vencida en juicio, siendo sin duda Colpensiones quien en este asunto debe asumirla.

Sin más consideraciones, la sentencia venida en apelación habrá de ser confirmada.

Finalmente, siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, las costas en esta instancia son a cargo de Colpensiones, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.



**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, con la claridad que la fecha a partir de cuándo deben ser reconocidos los intereses moratorios corresponden a la enunciada en la parte motiva de la decisión -12 de enero de 2018-.

Costas de segunda instancia a cargo de Colpensiones, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

**MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501120180036101  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** NELSON DE JESUS ORTEGA ARBOLEDA  
**Demandado:** A.F.P. PORVENIR S.A.  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 10/08/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario